

Justificante de firma de documento

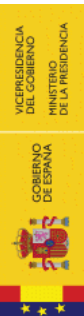
Fecha de generación: 28/07/2016 10:23

Nombre del documento: Resolucion_7680 Inadmisión 18 1 d) J.Ex

Relación de firmantes

Datos del firmante	Grafo de firma manual	Fecha de firma	Información de firma
ANGELINA TRIGO PORTELA		28/07/2016 10:04	Firma

Este documento es un justificante de firma que permite recuperar el archivo de firma digital original (el único con validez legal) introduciendo el código CSV ubicado en el margen izquierdo en la siguiente dirección: <https://sedempr.gob.es/es/sede/csv>



Con fecha de 18 de julio de 2016 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de la Presidencia-Presidencia del Gobierno, solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, presentada por [REDACTED] solicitud que quedó registrada con el número 001-007680:

“Solicitud: 1. Con carácter prioritario: Número de solicitudes de derecho de acceso desde la creación del servicio en la JUNTA DE EXTREMADURA hasta el 15/07/2016. 2. Con carácter complementario: Que se incluya en la descripción de las solicitudes requeridas anteriormente, -Fecha de registro y fecha de resolución. -Temática. -Órgano que resuelve. -Admisión o denegación del derecho de acceso, justificación. -Número de recursos presentados en relación con las solicitudes realizadas. Justificación: Se ruega que se atienda preferentemente al apartado “Prioritario” dado que por la carga de gestión de la información que puedan soportar así como por la coincidencia de esta petición con el periodo estival se pretende una resolución ágil de este derecho de acceso. El objetivo de la solicitud de esta información tiene una carácter investigador. Los resultados se presentarán en el estudio “Transparencia y buen gobierno: acceso a la información del sector público y su reutilización” en el VII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, Madrid (2016). Discúlpenme porque registré esta solicitud por correo electrónico dado que la página por problemas temporales no reconocía el certificado electrónico. [REDACTED]”

Con fecha de 27 de julio de 2016 esta solicitud se recibió en la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

De acuerdo con la letra d) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública cuando estén dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información.

Una vez analizada la solicitud, esta Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración considera que la misma incurre en el supuesto contemplado

en el expositivo precedente, toda vez que la información que se solicita no se encuentra en la Administración General del Estado.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la letra d) del artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, **se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información pública** que ha quedado identificada en el párrafo primero de esta resolución.

A juicio de esta Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, sería competente para conocer la solicitud de acceso a la información que se inadmite mediante la presente resolución la Junta de Extremadura, administración pública a la que deberá dirigirse el solicitante para recabar la información a través del siguiente enlace:

<https://ciudadano.gobex.es/atencionpersonalizada-buzoninformacion>

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.